

Martina Hingis habla de Marcelo Ríos y del circuito top del tenis

AÑO XXVIII - N° 1460 - 2 DE ABRIL DE 1999 - EJEMPLAR DE SUSCRIPCIÓN - PROHIBIDA SU VENTA

QUEPASA

www.quepasa.cl

Exclusivo:

Aninat contesta a los empresarios

10 analistas y hombres de negocios
interrogan al ministro sobre
el momento económico.



LA OFENSIVA DE
LOS HALCONES
DE PINOCHET



SUMARIO



FOTO PORTADA: MABEL MALDONADO

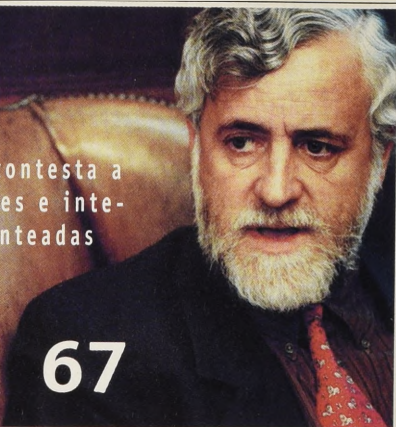
CARTA AL LECTOR	5
OJOS DE LA LLAVE	6
ENTREVISTA	15
PAIS	22
MUNDO	44
ANTENA	50
TIEMPOS MODERNOS	52
CAPSULAS	58
DEPORTES	60
TIRO LIBRE	65
NEGOCIOS	67
SOCIEDAD	78
GENTE	86
GUIA PANORAMA	90
IMAGENES	95
CORREO	97
TIRO AL BLANCO	98

PORTADA:

ANINAT RESPONDE

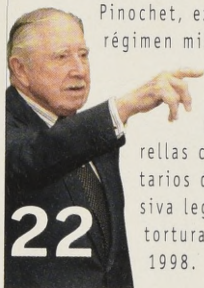
El ministro de Hacienda contesta a las principales inquietudes e interrogantes económicas planteadas por empresarios y economistas para el último año del Gobierno de Eduardo Frei.

67



GUERRILLA JUDICIAL

Convencidos de que La Moneda no se jugará por el retorno de Pinochet, ex ministros del régimen militar evalúan acciones hostiles hacia el oficialismo, como querrelas contra parlamentarios del PS y una ofensiva legal por casos de torturas entre 1990 y 1998.



22

EL OTRO MERCADO



CONZALO SANTA ANA

En Chile, se propagaron las comunidades de rehabilitación. Las 41 que existen tienen métodos y aranceles muy distintos, pero sólo una cuenta con un sistema de evaluación universalmente aceptado.

52

GLADYS MARIN, LA INFATIGABLE

En el tercer capítulo de esta serie especial, la candidata del PC enfrenta el cuestionario irreverente de Fernando Villegas.

39



TANGO PARA DOS

Aunque el asilo político concedido a Lino Oviedo en Argentina fue justificado como una maniobra para disminuir la tensión en Paraguay, entre Menem y el militar golpista existía una antigua amistad.



44

LA REINA DEL TENIS

Martina Hingis, foco de atención del tour dentro y fuera de la cancha, conversó con *Qué Pasa* sobre su buena relación con Marcelo Ríos, su fallido romance con Julián Alonso, y la creciente popularidad del tenis femenino.

60



REUTERS

MINUTOS SANTOS

La llegada del padre Rodrigo Tupper a canal 13 debió superar una serie de dificultades, siendo la más importante la negativa de Raúl Hasbún a disminuir su tiempo en pantalla.

78



JORGE FUICA

Guerrilla judi

Convencidos de que La Moneda no se jugará por el retorno de Pinochet, ex ministros del régimen militar evalúan acciones hostiles hacia el oficialismo, como querellas contra parlamentarios del PS y una ofensiva legal por casos de torturas entre 1990 y 1998.



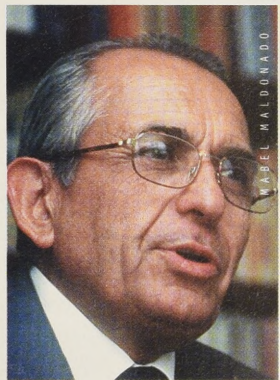
Los partidarios de Augusto Pinochet, que equivocadamente celebraron el fallo de los siete Lores de la ley el miércoles 24, hubiesen quedado estupefactos de ver la reacción que en ese momento tuvo el ex ministro Hernán Büchi. Instalado junto a otros ex asesores del general (r) en la Fundación Pinochet, Büchi se levantó indignado incluso antes de que finalizara la transmisión satelital y, luego de increpar soezmente a los distinguidos miembros de la corte británica que aparecían en pantalla, en un acto de impotencia se retiró de la sala especialmente habilitada para la ocasión. Detrás de él, otros le seguirían.

A todas luces, ni la champaña abierta por los pinochetistas ni el mediano optimismo esbozado por Carlos Cáceres se congraciaba en ese momento con la desazón e impotencia que evidenciaban los rostros de personajes clave del entorno pinochetista, como el propio Büchi, Alfonso Márquez de la Plata, Guillermo Arthur, Ambrosio Rodríguez y el abogado Fernando Uribe-Etxeberria. Este grupo de personas -las que en estos cinco meses de crisis han sustentado una posición más dura que la actitud moderada que en general impone Cáceres-, tras el fallo comenzó a diseñar una serie de estrategias tendientes a presionar al oficialismo, generar una posición más activa de los defensores de Pinochet en Santiago y evitar que el eventual regreso del senador vitalicio sea en el marco de un enjuiciamiento por violaciones a derechos humanos. El menú incluye querellas por injurias contra parlamentarios y dirigentes del PS y el inicio de procesos judiciales por casos de torturas cometidas durante las administraciones de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. A esto podría agregarse también, aunque no está decidido aún, manifestaciones masivas.

cial

En este sector de ex ministros y colaboradores se reconoce un liderazgo "informal" de Büchi. Este se ha distinguido por aportar claridad en el plano de las ideas y en la organización de estructuras eficientes. Después de la primera reunión de todos los ex ministros del régimen militar, donde la masividad de la concurrencia jugó en contra de una organización más racional de los esfuerzos, Büchi propuso trabajar con un esquema empresarial y crear una especie de directorio -que se reúne todos los martes- y que concentra las facultades ejecutivas.

En el entorno pinochetista más próximo a Büchi, el fallo no sólo causó rabia e impotencia; también trajo una evaluación posterior más que pesimista respecto de cómo vendría la mano desde Londres a partir del momento en que quedó claro que las cartas serían jugadas por el ministro Jack Straw. Pero la necesidad y decisión de iniciar una ofensiva más directa sólo se materializaría en sucesivos contactos de fin de semana y a partir del lunes 29. Ese día, las esperanzas de Pinochet nuevamente quedaron sepultadas, después que la High Court no aceptara la solicitud de la defensa del general (r) de dejarlo en libertad inmediata y concediera, en cambio, plazo hasta el 15 de abril al ministro Straw para emitir un pronunciamiento. Incluso, el abogado del ministro inglés admitió que éste no pretende anular su dictamen anterior y que esa resolución sólo será "suplementada", lo cual indica que no cambiará su decisión de fondo.



Cáceres: llamado a Cardemil para sondear en RN la posibilidad de efectuar una concentración pinochetista

A partir de ese momento, la línea argumental que comenzaron a compartir personajes como Büchi, Márquez de la Plata, Rodríguez y los otros fue una. "Straw no se la va a jugar y el gobierno no va a hacer nada realmente efectivo porque vuelva Pinochet. Ellos sólo lo quieren en Chile si viene bien amordazado", señala uno de estos ex funcionarios del régimen militar. El grupo está convencido de que La Moneda ha evaluado que el mejor escenario para el gobier-

no es que Pinochet se quede en Londres por el momento y que, en caso de que regrese, lo haga con un Consejo de Defensa del Estado haciéndose parte de las querellas en su contra y siendo enjuiciado por un ministro especial -cuestión que el gobierno le ha solicitado dos veces a la Corte Suprema-, fórmula que se ocupó para condenar a Manuel Contreras.

La certeza de que el gobierno prefería a Pinochet en Londres la obtuvieron de empresarios españoles que recibieron esa misma versión de boca de Cristián Tolosa, uno de los asesores más cercanos a Frei y director de la Secretaría de Comunicación y Cultura. En un viaje a España, efectuado entre el 1 y el 4 de febrero, Tolosa se reunió con prominentes empresarios españoles, y del contenido del encuentro se enteró el copresidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín. Lo que no sabía Tolosa es que Botín es una de las figuras más relevantes que ha pisado la residencia de Pinochet en Virginia Waters y que en una ocasión manifestó su extrañeza por la postura del gobierno chileno, dada a conocer en España por Tolosa.

Con todos estos elementos en la mano, el entorno pinochetista decidió que era el momento para iniciar una ofensiva más radical en defensa de Pinochet. De ahí que estén planificando una serie de estrategias que, una vez depuradas, serán informadas a RN y la UDI para trabajar en sintonía.

Parte de esta ofensiva dice relación con una actitud más combativa hacia parlamentarios del PS y el PPD. Es así como se ha ideado presentar querellas por injurias en contra de congresistas que hayan emitido juicios ofensivos con-

tra Pinochet. Como el general (r) está imposibilitado de iniciar acciones, los abogados ya han conversado con los hijos de Pinochet para que lo representen en el libelo. Hasta donde se sabe, ya habrían conseguido el visto bueno al menos de Verónica, Marco Antonio y Jacqueline.

Otra ofensiva es demostrarle al gobierno que "el panorama no está tan tranquilo" por la vía de activar o iniciar procesos judiciales contra los responsables de víctimas de torturas o apremios ilegítimos realizados durante las administraciones de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. En el entorno más cercano a Pinochet se reconoce que existe un grupo de abogados trabajando en la recolección de casos y que, a partir del próximo martes 6, se daría curso a esta ofensiva. "No buscamos tanto publicidad en los medios como que las medidas resulten efectivas para evitar un escenario adverso a Pinochet en Chile", confidenció un ex asesor del régimen militar.

Otro aspecto es generar movilizaciones favorables a Pinochet. Respecto de ese punto, Carlos Cáceres se comunicó, en la mañana del martes 30, con el diputado de RN, Alberto Cardemil, con quien sondeó la posibilidad de realizar una concentración. Un personero de RN señaló que, efectivamente, Cáceres estaba empeñado en esas tratativas, pero que "aún no hay una decisión oficial de RN sobre el tema",

agregando que hasta ahora la posición del partido es que ese tipo de manifestaciones locales no serían productivas para influir en Straw.

Lo que los parlamentarios de la UDI y RN sí consideran efectivo es conseguir cartas de figuras nacionales relevantes, misión que idearon en Londres y que trajeron como tarea a Chile. "Aún no está definido quién contactará a quién y, por lo tanto, no se han efectuado las gestiones",

dijo un miembro de la mesa de RN. La misma fuente añadió que las peticiones se dirigirán a las autoridades de las iglesias católica, judía y evangélica, al presidente de la Corte Suprema y a los presidentes de la Cámara y el Senado, entre otros personeros: "más que pedir cartas de apoyo en favor de Pinochet, la idea es que estas personas se refieran en sus respectivas áreas a la improcedencia de un eventual juicio de extradición". **ap**

El prominente empresario español Emilio Botín ha visitado a Pinochet en su obligada residencia en Londres.

Tras el éxito de la reunión Pinochet-Thatcher, los asesores comunicacionales del senador vitalicio en Londres buscan apoyo de figuras internacionales y diseñan pasos para torpedear las nuevas jugadas de Garzón.

Golpes



JAVIERA MORAGA
LONDRES

Desde que se conoció el fallo que dejó en manos del ministro inglés Jack Straw la liberación de Augusto Pinochet, en Londres, los cercanos al general (r) insisten una y otra vez en que este es un período de "iniciativas políticas". Y acorde con ello, planifican golpes comunicacionales, al estilo de la sorpresiva visita que realizó la ex primera ministra Margaret Thatcher a la casa donde se encuentra detenido el ex jefe militar chileno. La principal tarea, aseguran las fuentes en la capital inglesa, es mantener al tope el tema de

la cooperación de Pinochet con los ingleses en Las Malvinas, lo que incluiría nuevas revelaciones sobre ese episodio.

Los encargados de la campaña, encabezados por el abogado chileno Fernando Barros, están felices con el mensaje de agradecimiento que Margaret Thatcher llevó al senador vitalicio por su rol en "la campaña de Las Falklands", lo que habría generado un cambio de actitud en una buena parte de la opinión pública inglesa. Ese sector, a juicio de los asesores de Pinochet, ya no ve al general (r) sólo como el ex dictador latinoamericano, sino como un "antiguo aliado en la guerra" (ver artículo en la página 26). Una fuente vinculada a la campaña dijo que "sabemos que este es un tema muy

delicado en Chile (por las repercusiones en Argentina), pero en Inglaterra es uno de los mensajes que puede lograr la liberación".

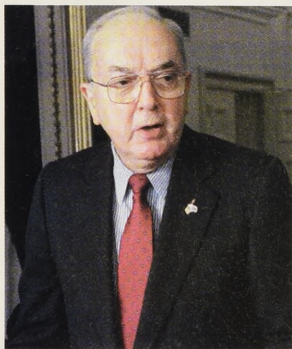
Además de mantener en alto el recuerdo de Las Malvinas, la estrategia contempla solicitar a personeros internacionales que intercedan ante Straw. La idea es que escriban cartas al ministro. Una de las personalidades que ya redactó la suya es el senador estadounidense Jesse Helms, aunque no es muy segura la efectividad que puedan tener los argumentos de un reconocido ultraconservador ante un laborista como Straw. Otro personaje contactado es el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Este ha sostenido varias conversaciones con Patrick Robertson, un asesor comunicacional de los conservadores, que en ocasiones anteriores ha colaborado con Kissinger y que actualmente trabaja con Barros. Kissinger habría prometido que una vez que apareciera su último libro -lanzado a comienzos de marzo- redactaría una carta o algún otro texto a favor de Pinochet.

Otro frente operará en Chile. Varios de los parlamentarios que estuvieron en Londres volvieron a Santiago con "tareas para la casa". Aunque la mayoría prefirió mantener reserva respecto de esas misiones, trascendió que deben conseguir cartas firmadas por personajes nacionales "neutrales". Entre estos últimos se contaría al Arzobispo de Santiago y el gran rabino.

de imagen

La campaña que desplegará el grupo de Barros también contempla denunciar "la motivación política" del juicio que sigue Garzón. Otra vía serán las acciones tendientes a poner en conocimiento de Straw la realidad política nacional y demostrar que después de firmar el Tratado Internacional Contra la Tortura en 1988, Chile tuvo "un comportamiento ejemplar" en esa materia. Para ello, publicarán en Londres declaraciones como las que formuló Patricio Aylwin el viernes 26, cuando dijo que no cree que hubo una aplicación sistemática de apremios ilegítimos entre 1988 y el inicio de su gobierno. También se entregará a los medios una pequeña guía sobre los casos de abuso policial en el mundo, entregados por Amnistía Internacional. Con eso se pretende sustentar un estudio para demostrar que 1989 fue un año particularmente ejemplar en Chile en esa área y que en ese lapso ocurrieron menos denuncias que bajo el gobierno de Aylwin.

Otra piedra angular de la ofensiva será conseguir copia de los nuevos casos de acusaciones de torturas que Garzón pretende agregar al proceso. Se espera que éstos sean revisados por ex miembros de la Comisión Rettig, para que se pronuncien acerca de su validez. Si estas opiniones son favorables para la defensa de Pinochet serán insertadas en la prensa inglesa. El optimismo se basa en la declaración



Jesse Helms: senador republicano ya escribió carta de apoyo a Pinochet.

formulada por José Luis Cea, quien dijo el viernes 26 que "el trabajo de la comisión fue muy acucioso y es muy improbable que existan casos de torturas no considerados en ella". El "comité político", como se bautizó al equipo comunicacional (ver recuadro), no había conseguido éxitos significativos desde que inició su labor en enero e, incluso, la utilidad y el costo de algunas de sus iniciativas fueron cuestionadas por políticos de derecha. Pero eso se revirtió con la operación que comenzó a gestarse minutos después de que los Lores entregaron su fallo. En la misma sala donde se dio a conocer el dictamen, sonó el celular de Robertson, antiguo colaborador de la "Dama de Hierro", a quien se le comunicó que la ex primera ministra lo esperaba con urgencia. Ella le propuso realizar la visita y le consultó sobre la posibilidad de que un equipo de TV la transmitiera en directo.

La líder conservadora fijó otra reunión para esa misma tarde. Pero el bombardeo de la OTAN se convirtió en la principal noticia del día en los hogares ingleses y el encuentro se suspendió 24 horas. El jueves 25 se realizó un almuerzo entre los parlamentarios chilenos que estaban en Londres y los miembros del "comité político" para coordinar tareas, pero en ese encuentro no se informó acerca de las gestiones que se hacían con Margaret Thatcher, lo que después produjo enojo en algunos políticos. Tras el almuerzo, Robertson y Barros fueron a la oficina de Margaret Thatcher. Ella le informó sus intenciones al abogado chileno y le pidió que fuera el traductor de su encuentro con Pinochet. Barros



Kissinger: contactos con Patrick Robertson para redactar misiva en favor del senador vitalicio.

se comunicó con el general (r) para informarle lo que se estaba fraguando y éste accedió de inmediato. También se consultó la opinión de sus abogados, quienes no pusieron reparos.

Robertson ya había conseguido que una unidad móvil de Sky News y un fotógrafo del Daily Telegraph cubrieran el saludo en exclusiva y Margaret Thatcher exigió que la noticia no se filtrara a otros medios, amenazando con no asistir a la cita. La operación se planificó hasta los más mínimos detalles, ya que no podía extenderse más allá de las 11.20, pues a esa hora el ministro de Defensa británico hablaría sobre las operaciones en Kosovo, lo que distraería la atención de la prensa. **qp**

El "Comité Político"

El grupo encargado de la campaña a favor de Pinochet en Londres está integrado por:

Fernando Barros: abogado chileno que viajó en junio de 1998 a Inglaterra para disfrutar de un año sabático con su familia (tiene 11 hijos). En enero decidió encabezar una ofensiva comunicacional y contrató a una de las mejores oficinas inglesas en la materia. Se ha ganado la confianza de Pinochet y almuerza a lo menos una vez a la semana con él.

Robin Harris: historiador, periodista y asesor político de Margaret Thatcher, fue el redactor del panfleto político que en enero trató de dar a conocer la versión de la derecha sobre las condiciones en que Pinochet asumió el poder. Tiene buenos contactos con la prensa.

Peter Schoad: empresario suizo que reside hace 10 años en Londres. Amigo personal de Pinochet. Lo visita más de una vez por semana y asiste a todas las audiencias judiciales, lo que le permite entregarle una opinión sobre el proceso independiente de la que presentan los abogados al general (r).

Julio Nández: abogado cubano-americano graduado en Harvard que trabajó en el departamento de Justicia estadounidense. Vivió en Argentina en los años 60 y 70 y conoce bien la realidad política latinoamericana.

Lord Norman Lamont: miembro del parlamento que ha usado sus facultades fiscalizadoras -preguntas que las autoridades del Ejecutivo están obligadas a responder- para hostilizar al ministro Straw y al canciller Robin Cook. Lamont consiguió que el gobierno reconociera que el Vaticano intercedió por Pinochet. El parlamentario reconoció a Qué Pasa que tiene preparada una nueva batería de preguntas pero prefirió, por razones estratégicas, mantenerlas bajo reserva.

Alianza silenciosa



Cuando el pasado viernes 26 -en la visita a la residencia de Surrey- la ex primera ministra Margaret Thatcher dijo al general (r) Augusto Pinochet que "sé lo mucho que le debemos por su apoyo y ayuda brindada durante la campaña de Falklands (Las Malvinas)", había medido estratégicamente sus palabras. Existe abundante bibliografía que da cuenta del apoyo que las autoridades chilenas dieron a Inglaterra durante la crisis que enfrentó a esta última con Argentina, en abril de 1982, por la posesión de las islas Malvinas.

Diversos analistas coincidieron en señalar que la mayor colaboración de Chile en favor de Gran Bretaña, antes y durante la crisis, consistió en información captada por la FACH y la Armada respecto de los movimientos y ubicación del contingente trasandino. Esta era una de las mayores dificultades que enfrentaban los británicos, dados los 13 mil kilómetros que separaban a sus bases militares de la zona de guerra. Fuentes cercanas a la Armada confirmaron que los sucesos de Las Malvinas estaban siendo observados por esa institución, debido a la posibilidad de que el país trasandino llegase a disponer de bases militares que le darían ventajas en un eventual conflicto con Chile. La revista británica Warplane señaló en 1986 que los servicios de inteligencia de la Armada chilena tuvieron la cer-

teza, a principios de marzo de 1982, de que los militares argentinos planeaban algo, aunque dudaban si el objetivo eran las Malvinas o una nueva arremetida sobre el Beagle, como había ocurrido en 1978 cuando Chile tuvo problemas con el país vecino. En abril, también la FACH detectó un inusual movimiento de vuelos comerciales al sur, que después se dijo fue la estrategia utilizada por Argentina para desplazar tropa.

Según Warplane, la cooperación de Chile fue negociada por el embajador británico en Santiago, John Heath, sólo a 48 horas de la crisis. Londres solicitó acceso al material de inteligencia, además de autorización para desplegar medios de reconocimiento, monitoreo e inteligencia en territorio chileno. También hubo apoyo de la embajada chilena en Londres encabezada por Miguel Alex Schweitzer, lugar donde se sabía que las informaciones de los agentes de seguridad chilenos eran interceptadas por Inglaterra.

Principalmente, el respaldo chileno provino de la Armada y la FACH. Esta última, a través del Centro de Operaciones Aéreo (COA), monitoreaba rutinariamente el espacio aéreo chileno entre el norte y el polo sur en un radio de 3.500 kilómetros hacia el mar, aportando valiosa información a las tropas británicas. El Ejército se limitó a desplazar a su 5ta. división a la frontera sur para contrarrestar una eventual ofensiva argentina contra Chile, lo que obligó a los trasan-

A dieciséis años del término del conflicto del Atlántico Sur, el apoyo brindado por Chile a Gran Bretaña es aceptado sin traumas en Argentina, pero sigue siendo un tema tabú en nuestro país.

dinos a desviar esfuerzos. Uno de los hechos más comentados de la colaboración chilena fue el hundimiento del navío trasandino Belgrano. El libro Señales de Guerra, de Lawrence Friedman, atribuye a la inteligencia naval chilena haber informado a los británicos del zarpe del Belgrano y los destructores Piedrabuena y Bouchard desde la base de Ushuahia. La información habría dado inicio a la operación que culminó con el hundimiento del navío y la muerte de 371 de sus 1.200 tripulantes.

Según Warplane, a cambio de la colaboración chilena, Gran Bretaña se comprometió a apoyar al gobierno de Pinochet en las Naciones Unidas -donde enfrentaba acusaciones por violaciones a los DD.HH. y las Fuerzas Armadas nacionales podrían adquirir equipo militar de origen británico en condiciones preferenciales. La transferencia a Chile, entre abril y noviembre de 1982, de una docena de cazabombarderos Hunter y otros aparatos militares habría sido fruto de esta operación.

El analista Rupert Allason -quien bajo el seudónimo de Nigel West publicó en 1997 el libro The secret war of Falklands- afirma que Heath también solicitó a las autoridades chilenas que se ejerciera alguna presión sobre Argentina en la zona austral. Otro resultado de los contactos fue la devolución a los ingleses del petrolero de flota Tidepool, adquirido recientemente por la marina chilena y que navegaba hacia Valparaíso al momento de estallar el conflicto. El petrolero prestó servicio a los británicos y después se reincorporó a la Escuadra Nacional en agosto de 1982, siendo rebautizado como Almirante Montt. **qp**

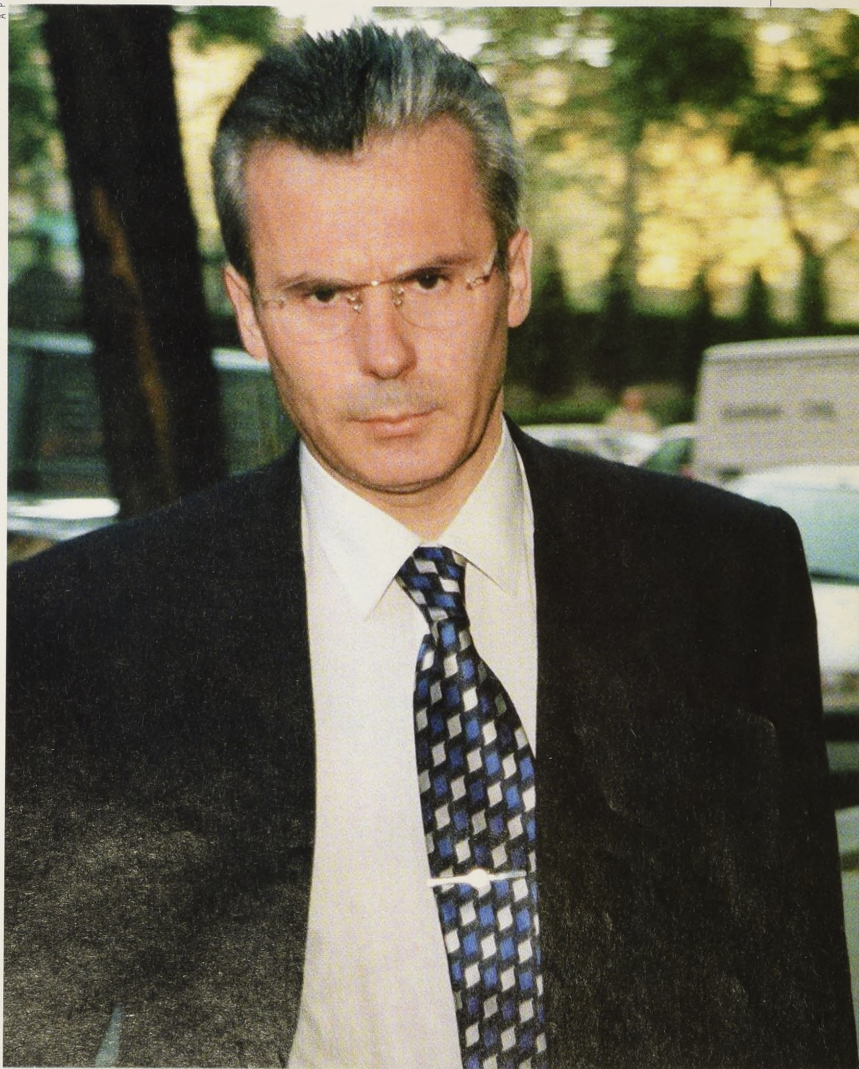
Arsenal de denuncias

Aunque a simple vista el panorama no es muy alentador para Baltasar Garzón luego del fallo de los Lores del pasado 24, el juez estrella de la Audiencia Española pretende revertir la situación ideando cuatro nuevas estrategias contra la defensa de Pinochet. Una de ellas, incluso, para procurar una "mejor derrota", pues, si se pierde el juicio por extradición o Straw determina que ese proceso no siga, Garzón pretende asegurarse de que el general (r) sea juzgado directamente en Londres a petición de la fiscalía inglesa, a la cual traspasó los documentos que posee, según un acuerdo al que ha llegado ya con el fiscal británico Alun Jones.

Las cuatro estrategias que seguirá Garzón, según filtró uno de sus colaboradores en Madrid, son: demostrar que los casos de tortura que se produjeron después de 1988 no fueron simples excesos policiales, mediante documentación y testimonios obtenidos en Chile que certifiquen que se dieron en el marco de investigaciones de organismos estatales -muchas de ellas solicitadas por la justicia militar- en casos que interesaban al gobierno para desarticular a sus adversarios políticos; insistir en los 1.198 casos de desaparecidos no considerados por los Lores, apoyado en documentos internacionales que consideran ese delito como una forma de tortura; agregar casos de tortura psicológica -respaldado por un fallo de una corte europea, la que afectaría a los familiares de las víctimas directas de las agresiones; y, por último, la ya mencionada intención de renunciar al rol estelar en la "cacería" de Pinochet para traspasarlo al fiscal Jones si la extradición naufraga.

Con respecto a las torturas posteriores al 8 de diciembre de 1988, el colaborador de Garzón confirmó que éste espera sumar cerca de 100 denuncias en los próximos días. Además de las 38 contenidas en el primer auto de procesamiento que envió a Londres y que sólo contempló a víctimas fatales registradas en el Informe Rettig, el juez agregó otros nueve casos de sobrevivientes a la tortura. Y Garzón espera agregar otros 40 casos de ese tipo antes del 7 de abril, plazo final entregado por Straw para que las partes le entreguen sus escritos.

La idea de Garzón no se restringe a sumar la



El juez Garzón prepara una estrategia de cuatro puntos para asegurar que Pinochet sea juzgado en Madrid -o por último en Londres- por 100 casos de torturas posteriores a diciembre de 1988 y por 1.198 desapariciones.

mayor cantidad de casos de tortura, sino a demostrar que éstos no fueron simples abusos policiales ocurridos en cualquiera comisaría. Apoyado por organizaciones humanitarias chilenas pretende reunir antecedentes -denuncias judiciales de la época- para probar que existieron cuarteles policiales y de agentes del Estado, donde la tortura se habría practicado en forma sistemática sobre militantes o sospechosos de pertenecer al PC, FPMR y Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). De hecho, una investigación realizada por **Qué Pasa** a partir de los registros de la Comisión Chilena de Derechos Humanos evidenció que en varios casos denunciados entre 1988 y 1989 se repetía un inmueble de la CNI -el aparato de seguridad del gobierno militar-, ubicado en calle Borgoño.

Para sustentar mejor su tesis, los grupos de derechos humanos le han facilitado testimonios de sobrevivientes que aseguran haber sido detenidos luego de un seguimiento y que durante la tortura fueron interrogados sobre actividades políticas de sus compañeros.

Diversos son los casos que maneja Garzón para presentar denuncias de torturas por agentes del Estado con posterioridad a la fecha fijada por los Loes. Entre éstos, las detenciones que se practicaron por órdenes de investigar emandas de fiscalías militares en la búsqueda de arsenales o la investigación de asesinatos de Carabineros. Consta en las denuncias que varios casos fueron finalmente traspasados a un fiscal militar.

Para probar las motivaciones políticas de los arrestos y de los tratos inhumanos, Garzón también tendría material. Por ejemplo, el 6 de diciembre de 1988, fueron detenidos en Santiago siete miembros de la célula Luis Emilio Recabarren de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), acusados de porte ilegal de armas, de ser autores de diversos asaltos y de la muerte de un oficial de Carabineros. Todos fueron trasladados al cuartel central de la CNI donde habrían recibido golpes de corriente, entre otras formas de tortura. Días después fueron puestos en libertad por falta de méritos. Un caso similar ocurrió a Luis Castillo, Pedro Vega y José Santos, detenidos en febrero del '89, por asistir al XV Congreso del PC. Fueron trasladados a la

3ª Comisaría de Carabineros, quedando a disposición de la Fiscalía Militar por supuesta infracción a la Ley de Control de Armas, delito que nunca se pudo probar.

Garzón también alegrará que el gobierno militar dispuso un andamiaje legal para facilitar el interrogatorio de detenidos, exponiéndolos a tratos crueles. Según consta en los archivos de organizaciones humanitarias, en general, las torturas se suscitaban durante los primeros cinco días de detención. Esto, porque hasta 1990 regía una disposición que permitía que todos los dete-

grantes del MJL y derivados a la fiscalía militar, acusados del asesinato de dos carabineros, además de robos a multitiendas. La CNI dio con su paradero luego de haber mantenido detenida durante 10 días a Leonor Espinoza, lapso en que ella denuncia que fue sometida a apremios, al tiempo que también se le acusaba por la muerte de los carabineros.

Además de estas investigaciones, el juez volverá a incorporar a su pedido de extradición los 1.198 casos de desaparecidos. En su escrito a la justicia inglesa del 26 de marzo señaló que la desaparición es considerada una forma de tortura según la Declaración de Protección de Todas las Personas -aprobada por la asamblea de la ONU en 1992- y que contempla en su introducción el Convenio Contra la Tortura suscrito por Inglaterra, España y Chile. Además, Garzón incluyó una recomendación que apunta a dos objetivos: demostrar que todos los casos de desapariciones siguen vigentes después de 1988 -pues serían secuestros que continúan en marcha mientras no se pruebe la muerte o liberación de la víctima- y, en segundo término, que los familiares de los desaparecidos también sufren tortura. Dice su escrito: "En tanto no se dé razón sobre el paradero de los desaparecidos, el delito se sigue cometiendo. Por tanto, permanece vigente el derecho de los familiares a conocer el destino de las víctimas: negar ese derecho por el hecho de que la privación de libertad se haya producido antes de septiembre de 1988 puede ser en sí mismo un trato inhumano".

Por otra parte, Garzón solicitó también incorporar en el proceso a víctimas de torturas psicológicas. Esto significa agregar a la solicitud de extradición los casos de los familiares de desaparecidos que, producto del desconocimiento del paradero de sus familiares, la tensión, la pena y la angustia, son considerados víctimas de apremios. Además, el juez recaba testimonios de familiares que aseguran haber presenciado las torturas de sus parientes como medida de amedrentamiento y extorsión para obtener información. Garzón basó sus argumentos en el llamado caso Kurt, donde el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo acogió la demanda de la madre de un desaparecido en Turquía. Según esa sentencia, "la incertidumbre, las dudas y las molestias sufridas por la demandante (...) le ha causado sufrimiento mental grave y angustia por lo que ha sufrido un trato inhumano y degradante". Además, se cita el caso Quinteros en Uruguay, donde la ONU considera que "los familiares de desaparecidos deben también ser considerados como víctimas de malos tratos". **qp**



Alun Jones: a petición de la fiscalía inglesa, Garzón entregó los documentos que posee para un eventual juicio de Pinochet en Londres.

nidos por Ley Antiterrorista pudiesen ser comunicados durante cinco o 10 días y, además, aceptaba que fuesen reclusos en dependencias policiales y no solamente en recintos penales. Esto habría permitido a la CNI llevar a los detenidos a su cuartel central o algún centro de tortura, como el de Borgoño.

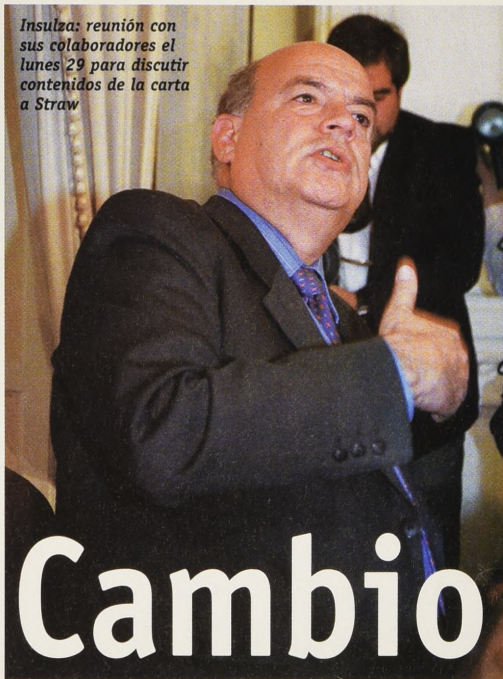
Un ejemplo que graficaría una política orientada a desarticular estructuras ultraizquierdistas mediante la tortura de militantes es el caso de Marco Ariel Antonioletti, Isabel Osorio, Patricia Irrázabal, Andrés Soto, Marcos Paulsen y Héctor Irrázabal. Los seis detenidos el 27 de octubre de 1989 fueron sindicados como inte-

Todas las informaciones emitidas desde La Moneda y la Cancillería tras el fallo de los Lores del miércoles 24 indicaban que al gobierno le parecía inapropiado hacer gestiones ante Jack Straw y que consideraba que el dictamen marcaba una victoria de las posiciones sustentadas por sus abogados. Pero esa postura fue modificada a medida que se acercó el encuentro con las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) del viernes 26.

El lunes 29, el gobierno terminó anunciando que enviará una carta a Straw en la que se invocan tres razones para que Pinochet vuelva. En ella, se señala el mejor derecho de Chile para juzgarlo, ya que los Lores limitaron mucho el período por el cual sería procesado en España, y en Santiago, eventualmente, tendría que responder por la totalidad de las denuncias en su contra; también se incluyó el argumento político de la "democracia fortalecida", que pretende demostrar que a Chile le haría muy bien realizar un juicio al general (r) y, por último, se argumentaron razones humanitarias.

Esta carta, según fuentes uniformadas, tuvo mucho que ver con la reunión que el canciller José Miguel Insulza sostuvo con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas la mañana del viernes 26. En ese encuentro, el gobierno se dio cuenta que el Cosena no venía fácil para La Moneda y que tratar de influir en la decisión de Straw a través de una carta era una manera de demostrar a los uniformados el interés del gobierno por el caso. Pero según fuentes de La Moneda, la decisión de enviar la carta no es producto de presiones, sino de "la dinámica judicial del caso". Hasta el viernes 26, la Cancillería supuso que la estrategia de los abogados de Pinochet de exigir un pronunciamiento de Straw inmediatamente después del fallo tendría éxito. Esto, dicen en esa cartera, dejaba al gobierno sin espacio para introducir nuevos antecedentes. Estas fuentes dicen que fue la postergación del dictamen de Straw y una carta del Home Office donde se comunicó la posibilidad de hacer presentaciones por escrito ante el ministro inglés -hasta el 7 de abril-, lo que hizo a la Cancillería estudiar la posibilidad de presentar la carta.

Insulza: reunión con sus colaboradores el lunes 29 para discutir contenidos de la carta a Straw



SUSAN LASEN

Cambio en el libreto oficialista

Aunque la decisión del gobierno de no hacer nada después del fallo habría sido modificada para evitar conflictos con los uniformados, en la Cancillería aseguran que la carta a Straw estaba contemplada en su estrategia.

Insulza tomó la decisión el lunes 29, cuando llamó a sus colaboradores para discutir el contenido de la misiva. El miércoles 31, Santiago Benadava, Jaime Lagos, Edmundo Vargas y Alberto van Klaveren, escribieron el primer boceto para discutirlo con el ministro. Según fuentes de Cancillería, el documento se presentará en Londres el mismo día que cierra la presentación de antecedentes.

Los sectores que aseguran que la carta es consecuencia de las presiones militares señalan que el gobierno está preocupado de evitar nuevos roces con los militares y que la carta era una manera de responder a las demandas de ese sector. Un antecedente previo al fallo acerca de que las relaciones con los uniformados no venían armoniosas fue el discurso del general Fernando Rojas Vender, durante la celebración del aniversario de la FACH. Aunque en esa ocasión el gobierno llamó a La Moneda a Rojas para mostrar su molestia y ninguno de los otros comandantes en jefe apoyó públicamente a su par de la FACH, la verdad es que éste sí recibió un fuerte espaldarazo en privado, tanto del general Ricardo Izurieta como del almirante Jorge Arancibia. El respaldo se materializó en una comida en el club militar de Lo Curro, donde participaron representantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas para agasajar a la FACH por su aniversario.

Ya en el consejo de gabinete celebrado el viernes 26 antes del Cosena, se manifestó la primera señal del cambio que se estaba experimentando en el gobierno respecto de no hacer nada después del fallo. Entonces, el ministro Jorge Arrate señaló que se argumentarían razones humanitarias ante el ministro Straw.

Fuentes de la Comisión Política del PS reconocieron que La Moneda optó por desagradar al ala izquierda de la Concertación y no abrir un conflicto con los uniformados. Los dirigentes socialistas reprobaban el curso que tomó La Moneda, pero dicen que era esperable porque el gobierno sabía que pagaría un menor costo público si decidía "chocar" con los socialistas. Esto, porque en el palacio estaban enterados de que el PS esta vez había acordado no hacer críticas públicas y que se concentraría exclusivamente en la campaña de Lagos. **qp**

Sorprendido por la cantidad de "doctores de la ley británica" que hay en Chile quedó el experto en Derecho Internacional José Zalaquett, tras examinar la prensa del jueves 25 y advertir la facilidad con que mucha gente opinó sobre el fallo de los Lores - una resolución contenida en cerca de 200 páginas - a sólo horas de su emisión. "Falta mucho conocimiento de la ley inglesa para hablar con mediana claridad", afirmó el ex integrante de la Comisión Rettig al aceptar la solicitud de

Guía para enten

El experto en Derecho Internacional y ex integrante de la Comisión Rettig, José Zalaquett, explica cómo se ha desarrollado todo el proceso en Londres y los alcances de la última resolución.



Qué Pasa para que estudiara el caso con el fin de explicar a los lectores el desarrollo de todo el proceso en Londres y los alcances de la última resolución.

Paseo por las cortes

El proceso que enfrenta Pinochet es un juicio mediante el cual la justicia española solicita su extradición y se ventila en una corte de primera instancia. Ese proceso nunca se ha puesto en marcha, porque los abogados del general (r) lo congelaron al interponer ante la High Court un recurso de Hábeas Corpus. Ese recurso alega que la detención fue ilegal, ya que los actos que se imputan fueron cometidos cuando Pinochet era Jefe de Estado y, por lo tanto, gozaría de inmunidad.

La High Court acogió el Hábeas Corpus por 3 a 0, pero la fiscalía inglesa -que representa a la justicia española- apeló ante los Lores de la Ley. Allí fue revisado por un comité de cinco Lores, quienes fallaron en contra de Pinochet por 3 a 2. Pero ese fallo fue anulado debido a que se probó que

uno de los magistrados no había declarado sus vínculos con una organización de derechos humanos que acusa a Pinochet.

Finalmente, el Hábeas Corpus fue revisado por otros siete Lores. Estos rechazaron la mayoría de los cargos, pero establecieron que la justicia inglesa reconoce que uno de éstos delitos -torturas- puede dar pie a una extradición, siempre que se haya cometido después de diciembre de 1988. Según otros analistas, también podría originar un juicio contra Pinochet directamente en Londres.

El paquete de leyes

Cuatro son las leyes que han tomado en cuenta todos los magistrados que han visto el recurso.

1. Ley de inmunidad de los Jefes de Estado.
2. Ley de extradición británica y Tratado de extradición europeo.
3. Tratado internacional contra la tortura.
4. Tratado internacional sobre "toma de rehenes" (norma que fue citada por los acusadores porque castiga la conducta más semejante a la "desaparición forzada").

Cuatro Preguntas

Cuando el recurso fue visto en la High Court, la discusión de los jueces giró en torno a cuatro preguntas: ¿goza Pinochet de inmunidad como ex Jefe de Estado respecto de los crímenes que se invocan en la petición de extradición? ¿la inmunidad que lo protegió siendo gobernante sigue activa después de dejar ese cargo? ¿si se acoge la tesis de que hay algunos crímenes de tal magnitud que no pueden ser cubiertos por inmunidad, cómo se diferencia la gravedad de esos crímenes? y ¿la renuncia de un Estado a su inmunidad frente a un tipo de crimen debe ser expresa o se puede deducir porque ese país firmó un tratado contra ese crimen?

Para responder las dos primeras interrogantes, los magistrados de la High Court recurrieron al Derecho Internacional que estipula dos tipos de inmunidad: la *ratione personae* (el individuo que ejecuta el delito está cubierto por la inmunidad) y la *ratione materiae* (es inmune el asunto o acto que constituye delito). La respuesta de la High Court es que si bien al dejar de ser gobernante Pinochet perdió la inmunidad *ratione personae*, sus actos siguieron protegidos por la *ratione materiae*.

Respecto de la tercera pregunta, los magistrados concluyen que es imposible diferenciar la gravedad de un crimen y que no basta calificarlos de horrorosos o inhumanos para levantar la inmunidad, salvo que un Estado renuncie a ella respecto de un delito determinado. Pero esa renuncia -y con esto responden la cuarta pregunta- debe ser expresa; por lo tanto, no basta deducir que un Estado perdió la inmunidad porque firmó un tratado que sanciona determinadas conductas, como la tortura, si en la redacción de esa convención no está contenida expresamente la renuncia. Con estos argumentos Pinochet ganó por 3-0 en la High Court.

El resbalón de Hoffmann

Los acusadores de Pinochet apelaron a los Lores de la Ley y un comité de cinco magistrados revisó el caso. Estos repitieron las preguntas de la High Court. Dos de los Lores llegaron a las mismas conclusiones que los magistrados anteriores, interpretando el Derecho Internacional desde la óptica tradicional que privilegia evitar los conflictos de competencia entre Estados. Pero en esta ocasión, tres Lores se inclinaron por una interpretación más mo-

der el fallo

derna-vertiente surgida después de los horrores de la II Guerra Mundial, que asegura que los derechos humanos incumben a toda la humanidad y que privilegia asegurar esos derechos por sobre la soberanía de los Estados si es necesario para evitar los excesos de un gobierno sobre sus ciudadanos.

En esta vertiente se fundaron los tribunales de Nuremberg y Tokio, en los años 40, y los de Yugoslavia y Ruanda, en los 90. De ella proviene la decisión de instaurar un Tribunal Penal Internacional en Roma, que aún no funciona porque falta la ratificación de algunos Estados. Y mientras no exista el tribunal de Roma, hay juristas que se inclinan por juzgar en cualquier corte del mundo delitos tales como genocidio, graves crímenes de guerra, crímenes contra la paz, segregación racial, torturas, toma de rehenes y desapariciones.

Así, la mayoría de estos primeros Lores estimó que Pinochet no tenía inmunidad, que si se puede

distinguir el nivel de gravedad de los delitos internacionales y que si un Estado firma un tratado sobre esta materia se deduce que renuncia a su inmunidad. Pero esa resolución fue anulada por los nexos de Lord Hoffmann con Amnistía Internacional.

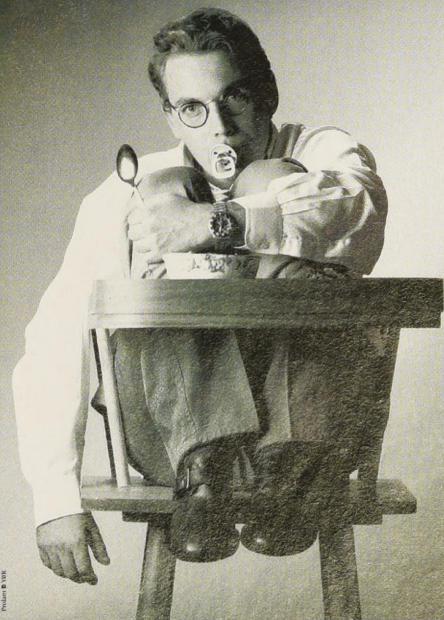
Duda clave

El nuevo comité de siete Lores agregó una pregunta previa a sus deliberaciones: ¿son delitos extraditables para la justicia inglesa los contenidos en la petición española? Los magistrados establecieron que para cursar la extradición la conducta debe ser considerada delito en el país que la pide y en el que la otorga (principio de doble criminalidad), pero quedaba un segundo punto: ¿debe ser considerada delito en ambos países al momento en que se produjo el supuesto crimen o cuando se pidió la extradición? Sobre esto último, los Lores

estimaron que debía ser considerado delito en ambos países al momento de su ejecución. Así, se concluyó que antes de 1988 Inglaterra y España no consideraban como delito la tortura internacional, porque recién ese año firmaron el pacto sobre esa materia. Por lo tanto, de los torturas imputadas a Pinochet sólo constituirían delitos extraditables entre Londres y Madrid las cometidas tras esa fecha. El asunto, entonces, no radicó en si Pinochet gozó o no de inmunidad, sino en que hasta 1988 no había en los dos países principio de doble criminalidad para los delitos que se le imputan.

En relación con los cargos por desaparición de personas, los Lores los desestimaron por la misma razón, ya que ese delito no existe en las leyes inglesas y aunque los acusadores trataron de asimilarlo a "toma de rehenes" (crimen terrorista sobre el cual los británicos firmaron un tratado), los magistrados lo rechazaron porque en la desaparición no se cumple el requisito de extorsionar para conseguir algo mediante amenazas sobre la víctima. Respecto de los cargos de genocidio, éstos fueron rechazados, porque las violaciones de derechos humanos por razones políticas no caben en esa categoría, reservada a crímenes contra un grupo en razón de su raza, nacionalidad o religión.

PARTICIPARON EN LA COBERTURA DEL INFORME PINOCHET EN LA ENCRUCIJADA, LOS SIGUIENTES PERIODISTAS: DANIELA ARANEDA, NANCY CASTILLO, BERNARDITA DEL SOLAR, GLORIA FAUNDEZ, GRACE GIBSON, LAURA LANDAETA, JUAN DIEGO MONTALVA, JAVIERA MORAGA (LONDRES), GUILLERMO MUÑOZ, PEDRO RAMIREZ Y ANDREA URRUTIA.



NO PERMITAS QUE TE TRATEN COMO CABRO CHICO.

Porque ya estás grande para poder decidir por ti mismo, SKY presenta SKY PREMIERE, tu entrada a películas y estrenos originales sin cortes y sin restricciones.

Ahora SKY PREMIERE te da la libertad de elegir entre 24 canales con películas recién estrenadas y sin cortes y además eventos y conciertos exclusivos que sólo podrás ver por SKY. Por módicos \$1.600, eliges y arriendas la película o el evento* que quieras y a la hora que quieras. Cambiate a SKY... Si no lo tienes, no sabes lo que te pierdes. Infórmate llamando gratis al 800-800-759. Suscríbete en Falabella, ABC, Tecnópolis-París, Dimarsa y en los Malls más importantes del país.

* (Los eventos tienen precio diferenciado dependiendo del evento específico.)

SKY
PREMIERE



El presidenciable y sus asesores debieron asumir el fracaso de su anunciado diseño de campaña "moderno" y convocar a los partidos a un trabajo electoral tradicional para garantizar un triunfo en las primarias.

HUGO CÓRDOVA

El ex ministro Ricardo Lagos abandonó optimista el edificio Diego Portales, cerca de las 19.00 del lunes 29. Tenía sus razones.

En el maletín de uno de sus colaboradores quedaron guardados más de 100 documentos firmados por alcaldes, concejales, parlamentarios y dirigentes del PS, PPD y PRSD, que se comprometieron a asegurar que Lagos contará con, a lo menos, 1 millón 200 mil votos para las primarias del 30 de mayo.

La firma de ese documento -que contiene el nombre, la comuna y el mínimo de votos que voluntariamente el firmante declara que aportará a esa elección- fue el corolario de un encuentro privado que los responsables del comando realizaron en el edificio Diego Portales. Pero aunque nadie lo dijo con todas sus letras, entre los congregados también se destacó que la reunión marcó el fin de un diseño de campaña ideado por el círculo íntimo de Lagos que, por meses, relegó a un segundo plano a los partidos que apoyan al ex ministro y que dejó en manos de un reducido grupo de colaboradores elegidos "a dedo" las principales tareas del comando.

La idea inicial era realizar una campaña moderna y en ese esquema no encajaban los partidos. La marginación de que fueron objeto, incluso, llevó a muchos dirigentes a la convicción de que Lagos y su equipo estaban trabajando en la creación del llamado "Partido Para Lagos". Las miradas apuntaban, entre otros aspectos, a las iniciativas impulsa-

das por el experto comunicacional Fernando Flores, compartidas por la mayoría de los cercanos a Lagos: la llamada Red Ciudadana y los talleres destinados a reforzar el compromiso emocional con la candidatura de Lagos.

Ambas iniciativas quedaron a medio camino. En el caso de la Red Ciudadana, la meta era contar con cerca de 600 mil personas inscritas antes de las primarias, las que se convertirían en el "piso electoral" y en la fuerza propagandista de Lagos, lo que evitaría recurrir exclusi-

vamente a los militantes. Además, generaría una nueva forma de hacer proselitismo que quitaría relevancia a los partidos y permitiría a Lagos mostrarse ante los electores con independencia frente a las colectividades. A fines de marzo, sin embargo, no más de 110 mil fichas habían llegado al comando y nada indicaba que en un mes se lograra alcanzar la meta.

Los talleres, en tanto, cumplieron con el objetivo de capacitar a cerca de tres mil personas vinculadas al PS y PPD, pero nada garantizaba

Lagos vuelve a la calle





que sus resultados -mejorar las relaciones interpersonales y afianzar el compromiso con Lagos- permanecieran en el tiempo. Para ello se requiere más de un taller por grupo y eso no está contemplado en la propuesta de Flores.

La decisión de dejar en manos de personas de confianza del comando las tareas de campaña jugó en contra. Muchos de ellos eran desconocidos o carecían de autoridad ante la base militante del PS y del PPD y, por lo mismo, no lograron concretar sus tareas. No sólo pasó con la Red Ciudadana, a cargo del concejal por La Pintana, Patricio Canelo. También con la campaña de inscripción de jóvenes en los registros electorales, a cargo de Carolina Tohá, que fue un rotundo fracaso.

Los resultados obtenidos a diciembre del año pasado llevaron a los cercanos a Lagos a "revalorizar" el rol de los partidos. El propio Lagos inició una ronda de encuentros con los dirigentes y militantes del PS y del PPD para incentivarlos a participar en la campaña y, de paso, aplacar las críticas. También tomó medidas que, para muchos, significaron un llamado de atención a los miembros de su equipo íntimo, por las disputas de poder que se dieron durante las giras realizadas a fines del año pasado. Así se entendió, por ejemplo, la designación de su sobrino, Matías de la Fuente, como responsable de la producción de los actos públicos.

En los hechos, Lagos y sus asesores llegaron al encuentro del Diego Portales con el ala herida. A pesar de ello, nunca fueron blanco de críticas públicas. Desde que la dirigencia y militancia PS-PPD se sumó en marzo a la campaña, los componentes del círculo cercano al presidenciable no son materia de preocupación en los partidos. Dirigentes de ambas colectividades aseguran que ya no les importan las disputas entre Jaime Estévez (PS) y Francisco Vidal (PPD), o si el ex ministro de Economía Alvaro García (PPD) está preparado políticamente para asumir un rol protagónico en el comando. Para la gran mayoría de la dirigencia partidaria, los resultados obtenidos por el "círculo de hierro" de Lagos hablan por sí solos y su única preocupación es equiparar el fuerte trabajo en terreno que desarrolló Andrés Zaldívar durante el verano y que en amplios círculos socia-

listas hace temer una nueva derrota.

Ahora, dicen, es el turno de los partidos, de volver a la campaña tradicional, de sacar al candidato a las calles y no pensar sólo en actividades para la prensa. No será fácil disminuir la distancia que existe entre Lagos y Zaldívar en el trabajo en terreno, considerando que mientras el PS y el PPD estaban al margen de la campaña, la maquinaria del PDC trabajaba a todo vapor. La estructura partidaria, en este aspecto, juega a favor del partido de Zaldívar. En todo caso, los seguidores del presidente del Senado se sorprendieron cuando al momento de entregar la lista de personas para conformar las comisiones organizadoras de las primarias en regiones, el PS, PPD y PRSD hicieron llegar a la Concertación una nómina con 339 nombres. El PDC entregó una lista con 340 personas.

Si bien las directrices generales de la campaña seguirán emanando del comando, son los partidos -a través de sus dirigentes, parlamentarios, concejales y alcaldes- los responsables del éxito o fracaso de Lagos en las primarias. De acuerdo al organigrama que se comenzó a aplicar a partir de marzo, los dirigentes de los partidos serán el nexo entre los cercanos al presidenciable y las bases. Personeros como Camilo Escalona (PS), Francisco Vidal (PPD), Ricardo Núñez (PS) e Isidro Solís (PRSD) o Guillermo Arenas (PPD) fueron designados responsables de determinadas regiones del país, y si bien su misión será supervisar el trabajo electoral, hasta ahora han dedicado gran parte del tiempo a solucionar conflictos entre los parlamentarios y alcaldes de sus zonas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Arica, donde el alcalde Iván Paredes (PS) está enfrascado en una disputa con el

diputado Salvador Urrutía (PPD) o los problemas que existen entre la diputada Fanny Pollarolo (PS) y el alcalde de Calama, Erwin Rowe Molina (PRSD).

Pero la motivación por ganar las primarias no es lo único que moverá a las dirigencias nacionales y locales de los partidos. Para nadie es un misterio que la campaña es la oportunidad para demostrar sus cualidades ante el líder y así asegurarse algún cargo en el futuro gobierno o un cupo en las próximas municipales o parlamentarias. Por lo mismo, no serán pocos los que recurrirán a todo su ingenio y capacidad de movilización para garantizar la cuota de votantes comprometida en el encuentro del lunes 29. Todos saben que sus aspiraciones pueden sufrir "muerte súbita" el 1 de junio,

cuando Lagos comience a chequear la votación obtenida en cada comuna con la que figura en el documento firmado por los responsables de esa zona.

También saben que el ex ministro tiene sus ojos puestos en aquellos parlamentarios y alcaldes que en el encuentro del Diego Portales comprometieron un aporte muy inferior a la votación personal que ellos han obtenido en las elecciones municipales y legislativas.

Pero no son los únicos que serán observados y evaluados por Lagos. Los funcionarios públicos también están en la mira. En la cita del lunes 29, el presidenciable fue claro en señalar que no aceptará que quienes se desempeñen en el aparato estatal se escuden en su calidad de funcionarios para marginarse de la campaña. En la ocasión, Lagos les recordó que sus labores culminan a las 18.00 y que a partir de ese momento -y los fines de semana- son simples ciudadanos que deben cumplir con sus responsabilidades políticas. "Si eso no ocurre, me gustaría conocer sus nombres", señaló a la platea. **qp**



Fernando Flores: el experto comunicacional fue el principal autor intelectual del fracasado diseño de campaña "moderno" que operaba al margen de los partidos





La operación Huepe

El nombre del subsecretario general de Gobierno es impulsado por personeros DC de la talla de Juan Villarzú, Belisario Velasco y Mariano Fernández, para competir por la presidencia de su partido en las próximas elecciones internas.



CLAUDIA VALLE

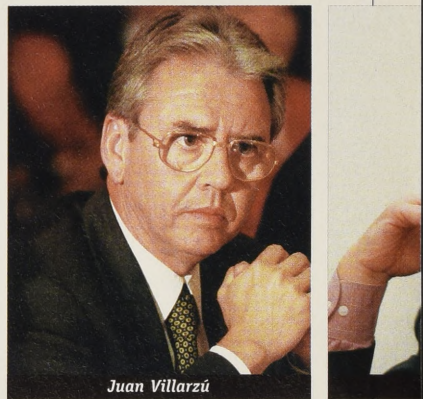
Que Claudio Huepe cambie la subsecretaría general de Gobierno por la presidencia de la Democracia Cristiana es una idea que hace meses sondean connotados personeros de esa colectividad.

Liderado por el ex ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, un grupo de personalidades de ese partido, entre los que se cuentan importantes funcionarios de gobierno, está planteando una fórmula alternativa a la línea de la actual directiva, si Andrés Zaldívar, el candidato presidencial DC, no tiene suerte en las primarias.

Sin embargo, la eventual postulación de Huepe -adscrito al lote "chascón", el más progresista del partido- no depende sólo del escenario del PDC después del 30 de mayo, sino también del grado de respaldo que pueda suscitar entre freistas y aylwinistas. Asimismo, especial importancia reviste la decisión de Andrés Palma -también chascón- respecto a competir en las elecciones partidarias.

Representantes de distintos sectores DC aseguran que Juan Villarzú -freista- es el gran promotor de una eventual candidatura del subsecretario. Aunque actualmente se desempeña como presidente de la Corporación Tiempo 2000 y de Esval, el ex ministro se ha dedicado también a debatir acerca del futuro de su partido. Hace algunos meses, comenzó junto a Eduardo Palma -un respetado exponente de la "vieja guardia" DC- a conversar con algunas personas respecto a las distintas posibilidades de conducción del partido. Eventos sociales, como las múltiples despedidas a Belisario Velasco -por su partida a la Embajada de Chile en Portugal-, sirvieron de escenario para avanzar en el tema. Según fuen-

Claudio Huepe: disposición a estudiar la oferta de postularse a la presidencia del PDC.



Juan Villarzú

tes que participan en la operación, los chascos del gobierno -como el ministro de Agricultura, Carlos Mladinić; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y el mismo Belisario Velasco- están entusiasmados con la idea. Pero aunque hubo varias conversaciones al respecto, la decisión del Consejo Nacional DC de postergar las elecciones internas hasta después de las primarias ha incidido en un mayor grado de cautela para tantear esta posibilidad.

Sólo alrededor de un mes y medio atrás se le planteó el punto al propio Huepe. Y aunque el subsecretario estaría dispuesto a asumir un desafío de ese tipo, si cuenta con el respaldo necesario, sus preocupaciones van desde el estado en que quedaría el PDC si Zaldívar sufre una derrota en las primarias, situación para la cual la colectividad no estaría preparada, hasta el riesgo de enfrentarse con Andrés Palma, a quien lo une una vieja amistad. El diputado por San Joaquín, además de ser un reconocido chascón, hace más de un año que trabaja en conjunto con los diputados que impulsaron la acusación constitucional contra Augusto Pinochet y han hablado, incluso, de levantar una opción a la dirigencia partidaria. En ese contexto, Huepe y Palma han tratado el tema un par de veces. Trascendió



que en esos contactos, el subsecretario dejó claro que, en ningún caso, competiría con el diputado. Este, a su vez, habría planteado que si bien estaba abierto a buscar un acuerdo político amplio, no concordaba con la reedición de la "megatendencia" (unión de aylwinistas, freistas y chascones), porque además de haber sido un acuerdo para las elecciones DC de 1997 no existe en la práctica. Consultado al respecto, Palma aclaró que no hará declaraciones hasta después de las primarias.

Y aunque muchos concuerden en que no es

de apoyar a Huepe, representante de un sector con el cual han mantenido una fuerte pugna histórica. "Esa sería la prueba de fuego de Gutemberg Martínez (líder aylwinista), ver si realmente puede ordenar a su gente en una empresa de ese tipo", dice un chascón. "Nosotros lo hicimos el 97 y si cumplimos, ¿por qué no los guatones?". Si el "Gute" diera ese paso, se abriría una puerta importante para un entendimiento estratégico en la DC, aseveran algunos chascones. Por el momento, connotados aylwinistas dicen apoyar de buen grado una postulación del sub-

tán preocupados respecto a las posibilidades de éxito de una candidatura del subsecretario. "No estamos dispuestos a llevar a Huepe al sacrificio, a menos que decidiéramos dar un testimonio". Agregan que tampoco quieren embarcarse en un proyecto que no les asegure posibilidades de cambios estructurales en la DC: "No queremos que Huepe termine administrando la extenuación del partido".

Otra de las condiciones que aylwinistas y chascones que apoyan al subsecretario consideran necesaria para su postulación es que cuente con la libertad de determinar quién integraría su lista, para garantizar una conducción homogénea y no sólo la suma de figuras con peso interno. De lo contrario, se produciría algo similar a lo que ocurrió con la mesa que encabezó Alejandro Foxley. "Para nadie es un misterio que Jorge Pizarro -vicepresidente aylwinista en ese momento- nunca se llevó bien con Foxley. Y en cierta medida, eso incidió en la suerte de esa conducción", dice un parlamentario ligado al aylwinismo.

Hasta ahora, los más escépticos ante la postulación del subsecretario son los freistas. Aseguran que el futuro de los "lo-

tes" que integraron la megatendencia no pasa por su candidatura. Más bien, por sumar a aquellos que apoyaron a Enrique Krauss a la presidencia del PDC y que hoy se encuentran desencantados con su gestión. Representantes freistas aseguran que los contactos con los senadores Gabriel Valdés y Carmen Frei van bien encaminados. Sobre todo, porque ambos quedaron muy decepcionados por la forma en que se zanjó el tema presidencial en la DC. Para estos freistas, levantar el nombre de Huepe no es más que una operación para convencer a Andrés Palma de no postular a la elección interna. **ap**



Belisario Velasco



Mariano Fernández



Carlos Mladinic

conveniente levantar una vez más la megatendencia, también saben que las posibilidades de triunfo se dan sólo en ese cuadro. Por esa razón, prominentes chascones dicen que lo importante es determinar qué peso específico tiene quien promueve la idea, refiriéndose a Villarzú. Distintas fuentes aseguran que el ex ministro opera solo, aunque reconocen que tiene buenos vínculos con varios sectores y que despierta grandes simpatías entre los DC por la forma en que salió del gobierno: impulsando una reforma tributaria y destacando la importancia del rol del Estado.

El punto es si el aylwinismo -el grupo más poderoso a nivel interno- estaría en condiciones

secretario. "Huepe es un hombre probado en el partido, moderado y con trayectoria". Además, aseguran que Martínez no tiene intenciones de presentarse de nuevo a la presidencia del partido, pues quedó muy desilusionado por la experiencia anterior. Menos lo haría si la competencia es a tres bandas. Sus intereses son consolidar su candidatura a senador por la VII Región. No obstante, personeros de su sector siguen considerando que es la mejor carta.

Los chascones aún no han decidido como grupo qué opción tomarán. Lo importante para ellos es no quebrarse, porque lo peor sería llevar dos candidatos a la interna DC. También es-

Buena ficha

A juicio de quienes impulsan la posible candidatura a la presidencia del PDC del subsecretario general de Gobierno, Claudio Huepe, varias son las ventajas que ofrecería su nominación. La principal de ellas es que, aunque está marcadamente identificado con el grupo más progresista del partido, no despierta odios intrínsecos en otros sectores y representa de alguna manera un cambio generacional en una colectividad cuya base parece hastiada de ver las mismas caras en la cúspide de la pirámide partidaria. Más que por su edad -tiene 59 años-, el cambio es percibido por su estilo relajado y abierto, distinto al común DC.

Huepe es considerado un buen articulador de acuerdos, cuenta con

una amplia trayectoria en el partido, que data desde antes de los años '70. Integró el grupo de los 13 militantes DC que firmaron una declaración en contra del golpe militar, cuando éste ocurrió.

Fue diputado hasta el 11 de septiembre de 1973 y estuvo varios años en el exilio. En 1989 volvió a la Cámara Baja, pero perdió en 1993. Al año siguiente, se integró a la directiva DC como vicepresidente y en 1997 asumió la subsecretaría general de Gobierno, donde ha tenido ocasión de brillar más debido a la opaca actuación que ha tenido el titular de esa cartera, Jorge Arrate (PS), quien luce incómodo en La Moneda desde que estalló el caso Pinochet.

Las metas pendientes



El principal desafío que tiene el gobierno y la sociedad chilena en 1999 continúa siendo detener la silenciosa penetración de la droga y revertir sus dañinos efectos

sobre las personas y la vida social. Día a día, crece la importancia de este flagelo, que destruye familias, barrios, el tejido social del país y cuyo efecto visible es el incremento de la violencia delictual.

Lamentablemente, se perdió la oportunidad de haberlo frenado en su inicio, cuando era más fácil. Ello, por la concurrencia de tres errores que creo indispensable y urgente corregir:

a) No darle la importancia que se merece al desafío de la droga, reduciéndolo a un problema policial.

b) Enfocar la crítica sobre los consumidores más que sobre los traficantes; los primeros debieran ser tratados como enfermos y no ser satanizados, tanto por razones éticas como para no contribuir a hacer de la adicción un tema oculto, de lo que no se habla en la magnitud debida en la familia, la comunidad y el país; en contraste, me parece que la prensa y, en general, la sociedad debieran prestar más atención y ser más duros con los lavadores de dinero y traficantes, dar más respaldo a la labor del Consejo de Defensa del Estado y, principalmente, entender que es una tarea de todos y no sólo de dicha institución.

c) El tercer error es haber hecho de la droga un tema de descalificación política, en particular, haberlo ocupado irresponsablemente para deteriorar la imagen del Parlamento y las instituciones democráticas, disminuyendo su capacidad efectiva de acción.

Ojalá en el último año de su mandato, el Presidente Frei enfrente también importantes tareas en el ámbito económico. La crisis asiática puso fin a un largo período de expansión de la economía chilena. El desafío es paliar algunos de los efectos sociales más adversos, en especial el desempleo, con iniciativa pública en las zonas más afectadas, y recu-

No es posible pedir que (Pinochet) sea objeto de unidad nacional, pero sí debiéramos demandar que las reacciones a favor y en contra se hagan dentro de las instituciones, fortaleciendo la democracia.

perar el ritmo de inversión y crecimiento, con mayor equilibrio social y regional. Para ello hay que enfatizar la confianza y estabilidad de las reglas del juego, con una más estrecha cooperación entre Hacienda y el Banco Central. Además, hay que estimular la revitalización del impulso exportador y resolver nuevos impulsos dinámicos que estimulen mayor ahorro e inversión. Esto supone una estrecha colaboración del Estado con el sector privado, en sus dos componentes, empresarios y trabajadores.

En lo político, la tendencia de fondo más

preocupante es el deterioro en la adhesión democrática, expresado principalmente en el desinterés de los jóvenes y otros sectores respecto a la vida política. Siendo 1999 un año electoral, la tarea principal de los partidos y candidatos es reencontrar la política con la ciudadanía, en especial con la juventud. Entre otras cosas, ello requiere posiciones claras de los distintos actores y aceptación de la diversidad.

El cuadro se ha hecho más difícil en los últimos meses, luego del arresto de Pinochet. En mi opinión, ha sido muy negativa la manera en que reaccionó la derecha, la que en vez de fortalecer las instituciones tendió a debilitar al Parlamento, impidiendo su funcionamiento, amenazó con regresiones antidemocráticas y ha calificado al que piensa distinto de no chileno o antipatriota. Acerca de Pinochet hay distintos juicios de valor en el país y es natural que así sea, dados los dolores y sufrimientos involucrados. No es posible pedir que él sea objeto de unidad nacional, pero sí debiéramos demandar que las reacciones a favor y en contra se hagan dentro de las instituciones, fortaleciendo la democracia.

El Presidente Frei tiene la responsabilidad de conducir al país a una mayor consolidación democrática, alejar los fantasmas del pasado y contribuir al triunfo de la Concertación en diciembre, permitiendo así la continuidad del exitoso proceso de transición iniciado en 1988.

Al respecto, me parece clave la voluntad de poner el acento en las tareas democratizadoras pendientes. No sólo en lo institucional, dónde la derecha seguirá frenando, sino sobre todo en lo social: reforma educacional, término de cheques en garantía, acceso más amplio a la salud y, en general, diversas medidas que contribuyan a mejorar la calidad humana cotidiana de nuestra sociedad. **qp**